



¿EL 21N ANUNCIA UN SALTO IRREVERSIBLE HACIA LA PAZ EN COLOMBIA?

Entrevista vía Skype a Camilo González Posso realizada por Eduardo Correa Senior.

Ciudad de México. 30 de Noviembre de 2019.

En Colombia hay “un nuevo estado de conciencia ciudadana” tras el paro nacional del 21 de noviembre (21N), que ha acelerado “la transición irreversible hacia la paz”, señala Camilo González Posso, Presidente de Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz que tiene su sede en Bogotá.

Entrevistado por Eduardo Correa Senior, integrante del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, González Posso destaca que “en estos años han tenido creciente protagonismo expresiones multitudinarias por cambios democráticos y por la terminación definitiva de la guerra y las violencias armadas”.

Y está convencido de que “el gobierno está obligado a reacomodarse ante la dimensión de la protesta y la inconformidad ciudadana. Este reacomodo y algunas concesiones son inevitables pero el gobierno está atrapado por el fanatismo de su propio partido, el Centro Democrático”.

En todo el mundo se sigue con atención lo que está sucediendo en Colombia. Llegan muchas imágenes y versiones catastróficas y en el día once del “paro nacional” algunas autoridades seguían hablando de conspiración internacional y de la presencia de extranjeros, enviados por gobiernos – Cuba y Venezuela entre ellos – para desestabilizar a Colombia y supuestamente llevarla a una situación como la de Chile o Ecuador.

EC. ¿En realidad que está pasando? ¿Colombia cayó otra vez en la guerra?

CGP. Aquí está pasando de todo pero lo más notable es que comenzó la verdadera paz con la presencia de millones de personas exigiendo respuestas sociales y democráticas a las demandas aplazadas por décadas. Por primera vez en Colombia se presenta un levantamiento pacífico de millones sin que desde el gobierno y el poder puedan desconocerlo con el argumento de que es simple terrorismo, subversión y conspiración violenta de minorías “desadaptadas”. Esas noticias sobre saqueos y agentes castrochavistas son una mezcla de amarillismo mediático y libreto de la ultraderecha que esta vez, gracias a la situación pos acuerdos y a la emergencia de los movimientos sociales, ha fracasado en estigmatizar la protesta social.

EC. Pero desde acá se ven saqueos y todo tipo de disparos en las calles...

CGP. En realidad el llamado “vandalismo” ha sido marginal en medio de grandes movilizaciones. Pequeños grupos han aprovechado para robar; también hay casos de infiltrados por la misma policía para desacreditar las marchas y justificar la brutalidad y no falta “la plaga” acostumbrada al enfrentamiento callejero. Pero lo notable es que frente a todos esas prácticas se ha manifestado la gente movilizada con una sensibilidad antiviolencia que muestra extraordinaria disciplina y



determinación de hacer la diferencia con la brutalidad de las operaciones de guerra que quiere mantener el gobierno.

El 21N salieron millones de personas en las grandes ciudades y en la mayoría de los municipios. El gobierno y sus copartidarios crearon un clima de pánico en las semanas anteriores al día del paro y se prepararon para una guerra. Todos los voceros del gobierno y de sus partidos aliados se dedicaron a advertir sobre supuestos planes de sabotaje internacional, presencia de agitadores y terroristas extranjeros, planes de saqueo al comercio y a las residencias. Mejor dicho “vienen las hordas”. Con esa retórica esperaron el paro diciéndoles a los ciudadanos que se prepararan para lo peor y que el desorden sería enfrentado con la ley marcial y el toque de queda si fuera necesario. A la hora de la verdad la campaña por el pánico tuvo el efecto contrario al que pretendían y se fue agigantando la determinación de la gente de aprovechar la convocatoria a paro para dejar aflorar toda la inconformidad y el rechazo a ese método de guerra psicológica y de guerra contra la protesta social.

EC. Y está el cacerolazo que no pueden calificar de “vandalismo”...

CGP. Sí. Ese cacerolazo ha sido lo más extraordinario. Emocionante que en cosa de minutos se hayan sincronizado otra vez millones de personas después de la gran movilización del 21N para hacerse sentir desde las casas y en los vecindarios. De esa música desde la intimidad con un grito de multitudes no se había hablado antes del paro ni se sabe cómo se regó por las redes la convocatoria; pero lo cierto es que ha sido una ola gigantesca que vincula a las familias y comunidades; el ruido de las cacerolas fue más fuerte que el de los disparos de gases del Escuadrón Móvil Antidisturbios y que el intento de meter miedo. Ha sido algo fantástico que ha seguido acompañando la movilización durante estos once días.

EC. Volviendo al principio, ¿por qué se está movilizando tanta gente? ¿Es por el Pliego del Comité de Paro o por sus propias demandas?

CGP. Ha sido una movilización urbana que venía expresándose en olas aparentemente separadas por diferentes reclamos. En estos años, incluidos los de negociaciones de paz e inicio de la implementación, han tenido creciente protagonismo expresiones multitudinarias por cambios democráticos y por la terminación definitiva de la guerra y las violencias armadas. Durante los meses anteriores al 21N se presentaron movilizaciones estudiantiles gigantesca en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla y Bucaramanga; el movimiento ambientalista se ha expresado en la defensa de los páramos y del agua con manifestaciones de decenas de miles; los indígenas y comunidades de las zonas más golpeadas por asesinato de líderes han estado en alerta movilizadas; millones de personas han reclamado indignadas ante la burla al mandato anticorrupción que logró 12 millones de votos en el referendo; en las elecciones del 22 de octubre pasado sufrió una derrota estruendosa el uribismo y ganaron candidatos independientes en las principales capitales. A todo esto se suma la onda de indignación en varios países de Latinoamérica y el impacto del levantamiento ciudadano en Chile en contra del paquetazo neoliberal amañado por el FMI y las orientaciones de la OCDE.

Cada vez que pienso en procesos de multitudes se me aparece la idea del Tsunami: la ola gigantesca de esta movilización es el resultado de la interacción de muchas olas que unen energías descomunales. Una *ola gigante* es una secuencia de olas que emergen y caen para volver a formar su frente de fuerza incontenible. Así estamos y parece que para rato.

En Colombia hemos estado en una tensión nueva entre grandes fuerzas desatadas a favor de la paz completa y de la implementación de los acuerdos, y las fuerzas de la “solución militar” a los



conflictos como forma de imponer un modelo autoritario de poder y economía. En las marchas y plantones desde el 21N al 30N el grito más sonado ha sido “Uribe paraco el pueblo está verraco” y el sentimiento que ha movido a millones es el rechazo a la violencia que se ha simbolizado en pequeños y grandes carteles que denuncian el bombardeo indiscriminado como el que produjo la masacre de 12 niños y niñas entre 9 y 15 años: “No mas niños asesinados” han dicho los pequeños letreros que se ponen en el pecho jóvenes de toda condición y madres indignadas. Muchos otros gritan exigiendo que se detenga el asesinato de líderes sociales y el genocidio de indígenas. Es que las cifras llegan en tres años a 727 asesinatos de líderes/as y de 173 excombatientes que firmaron la paz.

El Comité de Paro tiene como punto 10 del pliego presentado al gobierno el diálogo con Defendamos la Paz y la exigencia de cumplimiento de los acuerdos de paz, pero la paz y el rechazo al guerrerismo y a la violencia oficial han estado en la primera línea.

“NO TENEMOS MIEDO” es otro letrero repetido y convertido en clamor. La protesta no le ha cedido terreno a la campaña de pánico, ni a la brutalidad del ESMAD y por el contrario la gente salió a la calle en donde decretaron el “toque de queda” y sacaron tanques y fuerza armada con fusiles de asalto como para otra guerra. La indignación y el rechazo a la violencia se agigantó para repudiar el ataque terrorista a una estación de policía en Santader del Quilichao, una ciudad a 30 minutos de Cali, y ha llegado a su máxima expresión repudiando el asesinato del joven Dylan Cruz víctima en Bogotá por un disparo a la cabeza con un arma de uso frecuente de los Escuadrones Móviles Antidisturbios - ESMAD.

EC. ¿Cómo se conecta ese coro “Uribe paraco, el pueblo está verraco” con la movilización por la paz?

CGP. Es una buena pregunta. Como primera impresión, a algunos nos suena como un facilismo colectivo una frase pegajosa que se repite para no buscar más. Pero la lectura de la semántica de multitudes obliga a hacer una lectura seria de lo que es el coro en la calle, en los estadios antes y en medio de los partidos, en los conciertos y en los cacerolazos.

Ese “Uribe paraco” toma como blanco al jefe del partido de gobierno y de la ultraderecha que es percibido como el verdadero patrón, el que le fija los parámetros y estrategias al gobierno y hace ver al presidente que designó candidato como si fuera una marioneta.

El apelativo de “paraco”, convertido en lugar común, es una expresión de repudio no solo a la impunidad ante decenas de procesos judiciales del Jefe, sino el rechazo a la pretensión de volver a las políticas guerreristas que primaron durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Uribe ha sido el primero en salir a justificar los bombardeos indiscriminados y a decir que es legítimo bombardear con el aniquilamiento de decenas de personas si hay información de que entre ellas se encuentra un reconocido criminal o subversivo. Matar niños y niñas rehenes lo justifican los uribistas con la tesis de que la responsabilidad es de los ilegales que los secuestran o reclutan.

De la misma manera, con esta visión de una nueva guerra, el gobierno y sus copartidarios se han propuesto hacer una recomposición de la Policía y las Fuerzas Armadas para poner al mando a los más fieles de la estrategia de seguridad con guerra y retorno a las prácticas paramilitares de vinculación de civiles a tareas de orden público, ya sea como informantes orgánicos o como “comerciantes y finqueros armados”.

EC. ¿Se vuelve a la guerra sucia y al paramilitarismo?



CGP. Hay muchas señales de ese peligro. Ejemplos recientes hay varios: el New York Times destapó la olla; el Ministro de Defensa y los altos mandos intentaron encubrir el asesinato en la región de El Catatumbo de Dimar Torres, un ex integrante de las FARC que fue ultimado en una operación colectiva detalladamente planeada por una unidad del Ejército. En esa misma región el máximo comandante de la Operación Esparta arengó a la tropa reclamando resultados y diciendo “si tenemos que sicariar, sicariamos, si hay que aliarse con los “pelusos” (grupo armado ilegal) para combatir al ELN pues nos aliamos”. En lugar de la baja de su puesto, ese general ha sido rodeado de solidaridad de cuerpo. Y toda esa reestructuración de doctrina para otra guerra se completa con ordenes operacionales que establecen en Colombia la pena de muerte con solo calificar a un ilegal como integrante de lo que llaman un GAO- Grupo Armado Irregular – y “objetivo de alto valor”.

Con el acumulado de estos y muchos otros argumentos, al uribismo se le responsabiliza por intentar redefinir arbitrariamente los acuerdos de paz y reducirlos a su visión llamada “Paz con legalidad”. En lugar de cumplir integralmente y de buena fe con esos acuerdos, tal como ordena la Corte Constitucional y la realidad de mandatos constitucionales y legales, el gobierno manobra e intenta sustituir la política de Estado para la paz por una de reincorporación de excombatientes y con una estrategia de seguridad y defensa hecha a la medida de visiones partidistas.

EC. El rechazo a la violencia y a regreso a la guerra y la exigencia de avanzar en la paz es un motor de la protesta, pero ese es apenas un punto del pliego del paro. ¿Cómo se compagina esta explosión social con las demandas sociales?

CGP. La mayoría de los movilizados en las marchas son jóvenes entre 18 y 35 años y en los cacerolazos se están vinculando desde todos los rincones y condiciones sociales y generacionales. El sentimiento de fondo es un rechazo a un modelo de sociedad y de gobiernos excluyentes y de no futuro. La clase media y los sectores populares de menores ingresos y activos están agobiados por las íes: inequidad, insolidaridad, individualismo, inseguridad ciudadana y humana, incertidumbre vital, impunidad e injusticia social. La secuencia es de por sí explosiva pues brota de la desesperanza que se vuelve indignación y resistencia y salta desde allí a la protesta contra las manifestaciones más evidentes e inmediatas de un sistema antisocial.

Insisto en que lo que se ha desencadenado es un movimiento social anti modelo, anti sistema de la globalización excluyente y autoritaria. La llamada “tercera revolución tecnológica” y el inicio de la R 4.0 de la que tanto hablaron en el Foro Económico Mundial en Davos está redefiniendo las economías, el mundo del trabajo y de la cultura; todo al servicio del pequeño club de las multinacionales y grandes corporaciones que dominan la llamada revolución del conocimiento y su hegemonía basada en el control tecnológico y financiero.

Los que no caben en el círculo de la globalización multinacional y su élite de trabajo simbólico pasan a la franja de los excluidos, a la precarización profesional, al nuevo trabajo al destajo y por contratos cortos e inciertos. A los jóvenes el sistema les exige híper calificación para súper inestabilidad, alto endeudamiento y bajos ingresos. Por eso salen a gritar “el pueblo esta verraco”.

Estamos ante un movimiento social de resistencia que ataca pilares del modelo.

EC. Bueno y ¿qué es lo que dice el pliego?

CGP. La letra menuda del pliego del paro no es conocida por la gente pero se leen los titulares que son de rechazo a un “paquetazo” antisocial que está en la lógica de cambiar el reparto del producto o del valor agregado del país a favor del capital y en contra de la remuneración y del bienestar de la mayoría.



Se rechazan las reformas tributarias regresivas que buscan disminuir impuestos a las empresas, mantenerles exenciones y darles nuevas gabelas con el argumento de que así van a invertir más y dar más empleo.

Se rechazan las políticas de precarización del trabajo y de orientar las cargas en la clase media y sectores que viven del salario o del trabajo independiente en un país con 67% de trabajo informal.

Así mismo se expresa el rechazo a la privatización de la salud y de las pensiones y el desmonte de los sistemas solidarios, universales y públicos.

También ha emergido un nuevo ambientalismo que se recoge con el rechazo al fracking y defensa del Paramo de Santurbán. Este ambientalismo es antisistema pues rechaza radicalmente la reproducción del consumismo depredador de la naturaleza, el modelo de sociedad adicta a la energía fósil con sus consecuencias de contaminación, destrucción ambiental y aporte al calentamiento global catastrófico. En los últimos tiempos se ha multiplicado este movimiento en la defensa del agua, de los páramos, contra el extractivismo y la mega minería violenta con la naturaleza y con la gente.

Entre las exigencias están por supuesto el trámite de las normas anticorrupción, de la reforma política y del sistema electoral y la implementación integral del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado y las FARC.

Al gobierno se le exige que cumpla los acuerdos suscritos en los últimos años con diversos sectores, comenzando con los jóvenes, grupos étnicos, las mujeres y con grupos sociales en distintas regiones del país.

Son muchas demandas acumuladas y contemplan la derogatoria de varias leyes o normas que se han tramitado sin debate público ni transparencia.

EC. Ya vamos en el día once del paro y la movilización y no hay señales de que el gobierno vaya a ceder o a negociar. ¿Qué pasa con la Conversación o diálogo social que ha propuesto el gobierno?

CGP. Por lo pronto el gobierno ha llamado a una “Conversación Nacional” sobre temas de su agenda que se rozan con los de la movilización y dice que escuchará a invitados a diversas reuniones hasta febrero y que en marzo de 2020 presentará proyectos de ley incorporando algunas de las demandas. La “conversación” ha comenzado mal pero se hacen intentos para que se convierta en un verdadero diálogo social y político que permita concertar políticas y medidas que escuchen el clamor de la protesta.

El Presidente ha comenzado unas reuniones sin concertar la agenda y escogiendo los interlocutores a su criterio y conveniencia. Se intentó una primera reunión con el Comité de Paro pero el gobierno de entrada quiso limitar la conversación a la propaganda de su agenda o a una rendición de cuentas de lo que viene haciendo negándose a concertar la metodología y vetando temas.

EC. En las primeras reuniones se vio que no quiere negociar sino ganar tiempo y conversar con los sectores de su propia cuerda o personas que no están de acuerdo con las exigencias radicales del paro. ¿Será que va a negociar la disolución del ESMAD, la prohibición del fracking y el cambio de la política de financiación o tributación?



CGP. Así están las cosas. Van como cuatro reuniones de la Conversación Nacional en el Palacio de Nariño que en realidad han sido diseñadas como mesas antiparo con la intención del gobierno de darle tribuna a sus amigos, a grupos o personas que tienen sus propias agendas y otros que quieren aprovechar el espacio abierto para intentar algún retoque a las políticas y de hecho competirle a los voceros del paro y de la convocatoria a la movilización.

El intento de diálogo con el Comité de Paro y los estudiantes fracasó cuando el gobierno dijo que no acepta hablar de disolver el Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) y dio a entender que se niega a hablar de cambios en las estrategias de seguridad, guerra y órdenes operacionales a las Fuerzas Armadas que están abriendo camino a los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales y nueva guerra.

Algo parecido sucedió en el Taller que hizo Duque con los ambientalistas. El presidente Iván Duque les tiró un baldado de agua fría a los auténticos voceros de la movilización ambientalista de base, los que están a la cabeza de las exigencias contra el cambio climático, el fracking y el extractivismo, contra las multinacionales de la mega minería del oro que afecta los páramos como el de Santurbán y que son los que defienden las consultas populares y los territorios étnicos.

EC. ¿Se puede decir que no hay negociación sino nuevos escenarios de confrontación?

CGP. El lío es que estamos ante un gobierno débil y en crisis de gobernabilidad con muy poca capacidad de maniobra incluso ante su propio partido y el Jefe Máximo que es el expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez. La debilidad del Presidente es resultado de las circunstancias de su elección y del agotamiento del fanatismo autoritario de ultraderecha ante sectores mayoritarios de la ciudadanía.

Duque se destacó en el pasado como un congresista hábil y buen orador, como la figura más destacada del uribismo y eso le dio para ser escogido como candidato a la presidencia por su partido el Centro Democrático y como el predilecto del caudillo de la ultraderecha que es el que pone y quita. Pero esa marca de origen ha sido la base del desprestigio de Iván Duque pues, a pesar de sus esfuerzos, es visto como emisario de su patrón, sin ninguna autonomía en la toma de decisiones importantes.

En las elecciones presidenciales de 2016 por primera vez en Colombia, y gracias al nuevo clima político pos acuerdos de paz, la presidencia de la República fue disputada por un candidato representativo de la izquierda pacifista al punto que se puede decir que Duque ganó por un margen pequeño más por temor a Petro que por respaldo a las tesis del Centro Democrático y del guerrerismo uribista. Duque y Uribe se equivocaron de entrada y asumieron tener un mandato para renegociar los acuerdos de paz y desmontar la institucionalidad que se inició a construir para su implementación.

La línea fue “Sacar esos acuerdos de la constitución” y redefinirlos como “paz con legalidad y sin impunidad” en el lenguaje del “patrón”. En ese objetivo de redefinición de los acuerdos de paz, el gobierno de Duque gastó sus mejores energías en el primer año de gobierno y fracasó en su intento de desarticular la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros componentes del acuerdo final elevado por el Congreso de la República a la condición de obligación constitucional.

EC. ¿Usted dice entonces que el gobierno uribista está en crisis porque perdió la primera batalla en contra de los acuerdos de paz ?



CGP. Este gobierno está pagando el costo de intentar desarticular a la JEP, de no promover las reformas políticas y de anticorrupción, de negarse a avanzar en la reforma rural integral (RRI), de alinearse otra vez con la guerra antidrogas con su erradicación militarizada y anuncio de otra guerra química con glifosato. A pesar de la retórica de “paz con legalidad” y de la micro gerencia sin suficientes recursos que hace el Consejero para la Estabilización, la imagen del gobierno ante la gente es como promotor de otra guerra, de la vuelta atrás a la militarización y a las doctrinas de seguridad propias de un Estado de Guerra. Esta imagen ha chocado con la aspiración de no violencia y paz de la inmensa mayoría, incluyendo a muchos que votaron por Duque en las presidenciales. La incapacidad para desmontar la ola de asesinatos de líderes sociales y de excombatientes, la omisión, la banalización y el negacionismo, golpean al gobierno con la noticia diaria de masacres, homicidio y agresiones contra los pueblos étnicos y defensores de los acuerdos de paz en las regiones críticas.

En las semanas anteriores al 21N el gobierno y el Centro Democrático sufrieron grandes derrotas: 1. En el Congreso de la República se expresó una mayoría integrada por independientes y opositores que derrotaron el intento de desconocer el fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP y obligaron al Presidente a firmar la ley estatutaria y a garantizar la financiación del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 2. En las elecciones para alcaldes y gobernadores, el uribismo sufrió una ruda derrota, incluso en sus bastiones aparentemente infranqueables como Medellín. 3. Por primera vez desde la vigencia de la Constitución Política de 1991, el Congreso de la República tumba un ministro y obliga a la renuncia del Ministro de Defensa por el caso de los bombardeos que es emblemático de la nueva estrategia militar de meternos en otra guerra.

Según las encuestas, el 70% de los ciudadanos tiene una imagen negativa del presidente de la República. Y lo que es más dicente, el expresidente Uribe viene en caída en su prestigio y es visto por muchos como un sirirí en la nuca del Presidente y un encubridor de crímenes atroces del paramilitarismo (caso de los 12 apóstoles). Álvaro Uribe Vélez parece que quiere cogobernar desde su curul del Senado dándole libretos a la cúpula militar y con línea directa con los ministros de Hacienda, Defensa, Trabajo y otros funcionarios a quienes les da órdenes por celular pasando por encima del Presidente.

EC. ¿Eso no llevaría a concluir que está obligado a ceder ante las exigencias del paro?

CGP. La lógica indica que el gobierno está obligado a acomodarse ante la dimensión de la protesta y la inconformidad ciudadana. Ese acomodamiento y algunas concesiones son inevitables, pero el gobierno está atrapado por el fanatismo de su propio partido el Centro Democrático.

Los sectores más extremos en la extrema derecha han salido a pedir la renuncia de Duque y prefieren que asuma la actual Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. Otros le exigen una recomposición del gabinete de Ministros para que le dé mayor representación a las fracciones descontentas del mismo uribismo. Otros sectores del Centro Democrático barajan una nueva coalición para intentar, sin mucho margen, cambiar los números en el Congreso de la República entregando ministerios y capacidad de contratación a algunos sectores que han puesto límites al desmonte de los acuerdos de paz, pero que tienen grandes coincidencias con el plan de desarrollo y el programa de ajuste a las exigencias de la OCDE y a la política de alineamiento con Estados Unidos.

El fanatismo se caracteriza por la creencia que tiene que salvar al otro a pesar de sí mismo; por estar convencido que quienes se le oponen lo hacen porque no han comprendido bien el mensaje o porque son enemigos y obstáculos a vencer. Por eso el fanático responde a las críticas con nueva



prédica de su verdad, con “mejor comunicación” y con respuestas de fuerza contra los enemigos. En esa trampa está el uribismo y su gobierno.

En lo inmediato, el gobierno intenta ganar tiempo y espera que se desactive la movilización con menor convocatoria a las jornadas de protesta y tensiones con el comercio y el ambiente cultural en la cercanía de la navidad y receso en centros educativos.

EC. ¿Mejor dicho, la situación está bloqueada y lo único que se puede esperar es mayor respuesta represiva?

CGP. La situación es muy dinámica e incluye en navidad y primeras semanas de 2020 un cambio de formas y expresiones de la protesta. Se trata de una fuerza contenida que volverá a expresarse en los primeros meses del próximo año y que está construyendo nuevas alianzas y escenarios de diálogo y negociación.

El proceso de negociación está tomando cauces inéditos que dejan el dialogo con el gobierno en segundo plano. En la coyuntura es más importante la alianza y búsqueda de salidas con las bancadas independientes y de oposición en el Congreso de la República que en la mesa de conversaciones con el gobierno.

La declaración de voceros de esas bancadas en reunión conjunta con el Comité de Paro es un hecho extraordinario pues abre la posibilidad de una mesa de diálogo social Congreso – movimiento ciudadano para abordar temas cruciales que están en el pliego del paro y en las exigencias de la protesta.

Si esa mesa Congreso – Comité de Paro – Asamblea Nacional Democrática se configura puede abordar las exigencias sobre reforma tributaria, cambios en la ley del plan de desarrollo 2019-2023, rutas sobre cambios progresivos en materia laboral y de seguridad social y políticas de seguridad. Lo urgente es darle formalidad a esa mesa extraordinaria.

La otra negociación que se abre camino es la regional con alcaldes y gobernadores que inician su gestión el 1 de enero de 2020, es decir en 31 días. Con esos nuevos mandatarios se están ya perfilando espacios especiales de diálogo y concertación.

Pero todo esto no desconoce la importancia de seguir buscando que funcione una mesa de dialogo con el gobierno tal como lo han propuesto en la carta pública el Comité de Paro, numerosas organizaciones sociales y el movimiento Defendamos la Paz (DLP). Es un logro extraordinario que en el pliego del paro se haya incluido la exigencia de un diálogo del movimiento DLP con el gobierno para buscar rutas de efectiva implementación integral de los acuerdos de paz. Es difícil que Duque lo acepte, pero sería un salto en la dirección correcta.

EC. ¿Optimista por lo que sigue?

CGP. No es para menos. Después del 21N tenemos un nuevo estado de conciencia ciudadana. Es un movimiento social democrático que dará lugar a muchas coyunturas de resistencia y de acción transformadora. Ahora podemos decir que con la conciencia colectiva de no violencia comenzó la transición irreversible hacia la paz. Estamos ante la emergencia de una juventud y de una ciudadanía altamente politizada en el mejor sentido de la expresión, radical en contra de la guerra, la corrupción, la exclusión, la desigualdad, la depredación ambiental, la militarización y la discriminación.